Números bien sabidos

No es necesario recoger aquí estadísticas bien conocidas y frecuentemente invocadas, aunque tampoco podemos ignorarlas. Como *aide memoire*, me limitaré a recordar algunos datos que suministró el Observatorio Nacional Ciudadano sobre la situación de la criminalidad en 2017: los incrementos porcentuales de delitos en el primer trimestre de 2017 (gloso: año que pareció el “más violento” en nuestra historia reciente, pero sería superado por 2018, a despecho de la declinación que se observó en años anteriores), con respecto al mismo periodo de 2016, fueron los siguientes: homicidios dolosos, 29.48; homicidios culposos, 12.57; secuestros, 19.75; extorsiones, 29.55; robos con violencia, 32.31; robos de vehículos, 13.10; robos a casas habitación, 3.18; robos a negocios, 47.43; robos a transeúntes, 31.69, y violaciones, 5.74 (onc.org.mx/tag/delincuencia-en-mexico).

El mismo Observatorio señaló en su “Reporte sobre delitos de alto impacto correspondiente al mes de marzo de 2017”:

...la información estadística sobre carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de los estados revela que continúa el alza de la incidencia delictiva, sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Debido a esta situación, nos preocupa de (*sic*) sobremanera que aparentemente la crisis de seguridad y violencia por la cual atraviesa México no ha logrado detenerse en lo absoluto, al contrario, continúa avanzando en detrimento del bienestar de la población.

El reporte concluye:

La inseguridad en México no se trata de hechos aislados, sino de una situación que se ha vuelto estructural, que tiene distintas manifestaciones y que es multifactorial. La falta de seguridad ha creado un país con una población que se ha acostumbrado a vivir con miedo e indefensos ante la violencia ejercida día a día, la cual se incrementa progresivamente. Desde cualquier perspectiva, las cifras de incidencia delictiva son alarmantes en diversas regiones de nuestro país.

Agreguemos leña a la hoguera: el “World Internal Security and Police Index” del año 2016, elaborado por la International Police Science Association (IPSA) y el Institute for Economics and Peace (IEP), que mide la capacidad de los Estados para garantizar la seguridad pública, ubica a México en la posición 118 entre 127 países.

Veamos las noticias más recientes, que ciertamente no son tranquilizadoras. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó sobre la comisión de 28,809 homicidios dolosos en 2018, y 845 feminicidios en el ámbito local, números que contrastan con los 25,033 homicidios dolosos y los 736 feminicidios cometidos durante 2017. Esto implica un incremento de más del 15%. El mismo Secretariado informa sobre los números en materia de delitos contra la salud (supuestos de producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, posesión y otros) en enero de 2018: 506, y los números en el mismo sector en enero de 2019: 533.

Otra referencia inquietante: la “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana” realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en diciembre de 2018 revela que el 73.7% de la población mayor de edad considera que es inseguro vivir en las ciudades donde habita. Por otro lado, en la edición de 2018 del Índice de Paz Global, que mide el nivel de paz en 163 países, tomando en cuenta elementos tales como la seguridad, los conflictos internos e internacionales y la militarización, ubicó a México en la posición 140.

Vayamos al Plan. En éste se afirma: “más de 200 mil personas han sido asesinadas y más de 37 mil se encuentran desaparecidas”. Seguramente el Plan consideró las cifras que antes mencioné y otras más, ampliamente difundidas, cuando afirmó que en México existe una “crisis de seguridad (...) no vista desde los tiempos posrevolucionarios”. Y añade, estableciendo la frontera con el pasado inmediato —deslinde que invariablemente aplicamos en los relevos políticos, cualesquiera que sean los signos del sujeto relevante y del sujeto relevado—, que “el próximo gobierno recibirá una seguridad en ruinas y un país convertido en panteón”.

Digamos, de paso, que en los primeros días de ese “próximo gobierno” también hubo hechos muy preocupantes, que, por supuesto, no pretendo atribuir a la nueva gestión. La estadística suministrada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondiente sólo al primer mes de 2019, muestra cifras muy preocupantes. En enero de 2018 la incidencia delictiva total fue de 148,152 delitos. De éstos, 2,171 homicidios dolosos, 67 feminicidios, 76 secuestros, 434 extorsiones y 62,733 robos. En enero de 2019 los números se movieron como sigue: incidencia delictiva total: 160,712 (incremento de 12,660, que significa 8.48%, proporción que excede, con mucho, al incremento de la población de un año a otro). De ellos, 2,452 homicidios dolosos, 70 feminicidios, 140 secuestros, 693 extorsiones y 66,205 robos.

En la prensa del 10 de marzo de 2019 (diario *El Universal*) se informó que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras de “muertes violentas” registradas en los meses de enero correspondientes a los años de inicio de cada “sexenio” en la Administración Federal fueron las siguientes: enero de 2006, 995; enero de 2012, 1,750, y enero de 2019, 2,853. En el mismo diario aparece la información aportada por la organización Alto al Secuestro, en los siguientes términos: “aumento de 51.6% en las víctimas de este delito en enero, al sumar 229 contra las 151 contabilizadas en el mes de diciembre del año pasado”.

El estudio de la situación prevaleciente en materia de inseguridad y criminalidad invita a examinar la acción del Estado para enfrentar a la delincuencia, acción que se despliega — sin perjuicio de otras tareas en el plano preventivo— en la persecución penal: investigación, enjuiciamiento, sanción, por una parte; impunidad, por la otra. Hoy día el panorama es muy preocupante. La impunidad prevalece. El Plan destaca que en la Consulta Nacional acerca de seguridad y justicia y en los foros de escucha sobre la misma materia, todos ellos conducentes a la formulación de aquel, “quedó claro que no se ha hecho justicia a la enorme mayoría de los muertos, los lesionados, los torturados, los ausentes y los desplazados y que los delitos correspondientes han quedado impunes”.

Agreguemos ahora sólo un estudio sobre este asunto, el IGI-MEX (*Índice Global de Impunidad en México, 2018*), elaborado por la Universidad de Las Américas (UDLA), en Puebla. Ahí se indica que el promedio nacional del índice de impunidad (IGI-MEX2018) en el país, tomando en cuenta las 32 entidades federativas, se elevó a 69.84 puntos, en contraste con 67.42, indicador que corresponde a 2016. El estudio de la UDLA apunta: “México empeora en los índices de impunidad global y estatal”. Nuestro país “ocupa el cuarto lugar del *Índice Global de Impunidad* (IGI-2017) con 69.21 puntos”, y en esta materia “encabeza la lista de los países del continente americano con el más alto índice de impunidad”.

Las apreciaciones contenidas en el Plan acerca del tema que vengo destacando aparecen también en la Iniciativa de reforma constitucional del 19 de noviembre de 2018, cuya exposición de motivos señala:

Desde fines de 2006 México pasa por una crisis de violencia, inseguridad e impunidad, reconocida por propios y extraños, que causa un enorme sufrimiento social, hace imposible la construcción de bienestar y amenaza con llevar el país a la inderogabilidad (*sic*). El incremento de los índices delictivos expone a la población a la zozobra, destruye el tejido social, se cobra decenas de miles de vidas al año y causa graves afectaciones patrimoniales.

Por lo demás, el gravísimo problema de la impunidad ha destacado continuamente. “Más del 90% de los delitos cometidos desembocan en la impunidad”, señaló —acogiendo estadísticas constantes— la exposición de motivos de la Iniciativa de reforma constitucional.

En el dictamen del 16 de enero de 2019 se reconoce la misma situación, un *leitmotiv* de los discursos, las deliberaciones, las normas, los reproches y los enconos, pero además de las tribulaciones sociales. En las primeras líneas de las “Consideraciones” incorporadas en ese documento se advierte que

...la crisis de inseguridad y violencia que azota a México es una realidad que ha sobrepasado las capacidades institucionales existentes y a las estrategias utilizadas en los últimos años. Fue así que, en ánimo de colaborar con la creación de una nueva estrategia, la Cámara de Diputados inició la discusión de una reforma constitucional relativa a la Guardia Nacional.

Agreguemos las aleccionadoras expresiones del dictamen senatorial del 19 de febrero: los esfuerzos hechos para contener la delincuencia han resultado insuficientes; “contamos con cuerpos de seguridad estatales y municipales, marcados por una debilidad institucional, los policiales actuales no cuentan con la fuerza necesaria para hacer frente a los grupos criminales, los cuales tienen gran capacidad de fuego y se han infiltrado en todos los niveles del poder público”.

Y digamos de una vez que esta misma línea de preocupación, a la vista de la violencia creciente y la arraigada impunidad que se han extendido en toda la República, apareció en la deliberación realizada en ambas cámaras del Congreso acerca de la reforma al artículo 19 constitucional, consecuente con la que ahora estamos analizando, aunque separada de ella, y a la que me referiré en el apartado 24 de este trabajo.

Las palabras del Plan, de la Iniciativa y de los posteriores documentos de la reforma permiten recordar, a siete años de distancia, el diagnóstico contenido en el documento

denominado “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia”, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2011 (al que me referiré como Documento-UNAM), al cabo de un congreso internacional promovido por la Universidad y por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional:

En nuestro país, la convivencia de las familias, en las comunidades y en las ciudades atraviesa por una crisis. Entre sus más dolorosas y dramáticas manifestaciones figuran la multiplicación y diversificación de la delincuencia, la violencia y la inseguridad. El diagnóstico y las estrategias para contener y acabar estos fenómenos han sido insuficientes. La información disponible muestra un acelerado crecimiento de la violencia.

Sabemos, por fuentes oficiosas u oficiales o por dolorosas experiencias propias o cercanas, que la delincuencia tradicional y la delincuencia evolucionada han aumentado —con oscilaciones temporales: golondrinas que no hacen verano— y que hoy día abarcan todo el país, aunque su incidencia sea mayor en ciertas regiones que escaparon al control del Estado y han caído en el de la criminalidad, sea abarcando territorios identificados, sea discurriendo largamente en redes subterráneas, como ha sucedido en el caso —apenas creíble, a estas alturas de la historia— del robo de combustible de los ductos que abastece Petróleos Mexicanos. En los paraísos del crimen cohabitan el poder formal, que cobra impuestos, y el informal, que también los cobra con distinta factura, y además toma vidas.